El Consejo de los Pueblos de San Marcos CPSM manifiesta su preocupación por

La criminalización de la resistencia pacífica que hombres y mujeres han realizado en la legítima defensa de su territorio y sus derechos (económicos, sociales, culturales y ambientales) así como de los recursos naturales que pertenecen a las comunidades. La empresa minera transnacional canadiense, Goldcorp está persiguiendo judicialmente a 9 mujeres de las comunidades cercanas al proyecto minero Marlin (municipio de San Miguel Ixtahuacan). La empresa transnacional española Unión Fenosa ha emprendido persecución judicial contra la población de varios municipios del departamento de San Marcos. Estas empresas tienen pocos años de operar en el territorio mientras que las poblaciones indígenas lo han habitado desde hace miles de años.

La imposición de proyectos hidroeléctricos privados, que finqueros y el Ministerio de Energía y Minas, están haciendo en las comunidades de la boca-costa de San Marcos. Al querer desviar los cauces de los ríos que abastecen a más de 17 comunidades de San Pablo, San Rafael P.C., El Rodeo y Malacatán se viene a violentar la paz de las comunidades, en términos sociales y culturales. Además motiva el desalojo de las tierras que muchas familias han recibido en pago por sus años de trabajo en las fincas cafetaleras.

Vemos con mucha preocupación que el gobierno no ha tomado en cuenta los aportes que los pueblos indígenas y organizaciones de la sociedad civil han planteado en el tema de reforma agraria. Urge atender la demanda de acceso a la tierra del pueblo organizado; la condonación de la deuda agraria accesada a través de diversos programas de gobierno que solo han llevado más miseria al pueblo debido a los altos intereses. Se debe prestar atención a los conflictos agrarios, como el de San Luis Malacatán entre otros, que demuestran como el Estado ha estafado a los campesinos y campesinas.

La militarización que el gobierno de "rostro maya" realiza en territorio indígena, con la excusa de combatir el narcotráfico. La verdad detrás de estas acciones es amedrentar a la población e impedir la organización y la resistencia en defensa del territorio.

Decepciona el actuar de los 9 diputados del departamento de San Marcos. No han defendido los intereses de la población y se han plegado a la agenda que el CACIF está impulsando en este poder del estado. Es decir, no han denunciado el plan visión de país, que simplemente es una cuchillada al presente de la población y niega toda posibilidad de futuro. Además de aprobar leyes lesivas a los intereses de la población.

Nos defrauda la postura de las instituciones del estado, al seguir con las prácticas de racismo y discriminación institucionalizadas, pues siguen negando la posibilidad de autodeterminación que nos asiste a los pueblos.

Exigimos la inmediata liberación del compañero del municipio de Malacatan que se encuentra preso en la cabecera departamental de San Marcos. Nuevamente el gobierno y las empresas transnacionales se unen en su lucha contra líderes populares que defienden los intereses de las mayorías.

San Marcos 14 de enero de 2009

bernación Departamental
SAN MARCOS
RECIBIDO
14 ENE. 2009
Guatemala, C. A.
11 M. 40 F. Ungrid.